



Año CXV

Panamá, R. de Panamá lunes 18 de enero de 2016

N° 27950

CONTENIDO

MINISTERIO DE GOBIERNO

Decreto Ejecutivo N° 7  
(De viernes 15 de enero de 2016)

QUE ORDENA EL CIERRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS OFICINAS PÚBLICAS NACIONALES Y MUNICIPALES CON MOTIVO DEL CARNAVAL DEL AÑO 2016.

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN N° 9514-Elec  
(De miércoles 30 de diciembre de 2015)

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA DISPENSA A LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) Y A LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A. (EDECHI) DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 82, TÍTULO V DEL REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DENOMINADO RÉGIMEN DE SUMINISTRO APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN AN NO. 411-ELEC DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y SUS MODIFICACIONES.

Resolución AN N° 9516-Elec  
(De miércoles 30 de diciembre de 2015)

POR LA CUAL SE APRUEBA MODIFICACIONES A LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE PAGOS (MGP).

Resolución AN N° 9517-Elec  
(De miércoles 30 de diciembre de 2015)

POR LA CUAL SE APRUEBA MODIFICACIONES A LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA APORTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA, DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL SERVICIO AUXILIAR DEL SISTEMA REQUERIDO POR LOS CRITERIOS DE CALIDAD Y COMO SE ASIGNA (MSA).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fallo N° S/N  
(De jueves 29 de octubre de 2015)

POR EL CUAL SE DECLARA QUE NO ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN NO. AL-002-11 DE 5 DE ENERO DE 2011, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE PANAMÁ.

Fallo N° S/N  
(De martes 22 de septiembre de 2015)

POR EL CUAL SE DECLARA QUE SON ILEGALES, LAS FRASES “...EL PROMITENTE VENDEDOR DEBE ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE ENTREGA E INFORMARLO ASÍ AL COMPRADOR”. Y , “EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL NUEVO PLAZO DE ENTREGA FIJADO..,” CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 43 DEL

DECRETO EJECUTIVO NO. 46 DE 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.

---

**AVISOS / EDICTOS**

---

**REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE GOBIERNO**

**DECRETO EJECUTIVO N.º 7**  
De 15 de *enero* de 2016



Que ordena el cierre en todo el territorio nacional de las oficinas públicas nacionales y municipales con motivo del Carnaval del año 2016

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,**  
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

**CONSIDERANDO:**

Que los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2016, se celebran en nuestro país, las tradicionales fiestas del Carnaval, como una representación cultural que brinda entretenimiento al pueblo panameño, las cuales constituyen una actividad social y turística;

Que esta actividad constituye un factor importante para la economía y la promoción del turismo de la República de Panamá;

Que el Gobierno de la República de Panamá reconoce la participación activa de diversos sectores de la población en las fiestas del carnaval;

**DECRETA:**

**Artículo 1.** Ordenar el cierre en todo el territorio nacional, de las oficinas públicas nacionales y municipales, el día lunes 8 de febrero de 2016, durante todo el día, con motivo de la celebración de las fiestas del Carnaval. El miércoles 10 de febrero de 2016, las oficinas públicas laborarán en horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

**Artículo 2.** Los servidores públicos, deberán laborar los días 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de enero y 1, 2 y 3 de febrero de 2016, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para compensar las horas correspondientes a la jornada regular de trabajo de los días a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 3.** Exceptuar de lo dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo, las oficinas públicas que por razón de la naturaleza del servicio que prestan deban permanecer funcionando, tales como: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.), las instituciones de salud, como hospitales, clínicas, policlínicas, centros de salud y unidades de salud, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud; los servicios postales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Metro de Panamá S.A., el Servicio Nacional de Migración y la Fuerza Pública.

**Artículo 4.** Las instituciones bancarias se regirán por lo establecido en la Resolución S.B.P. N.º 124-006 de 4 de diciembre de 2006.

**Artículo 5.** Excluir de la aplicación de este Decreto Ejecutivo, a la Autoridad del Canal de Panamá conforme lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997.

**Artículo 6.** Suspender durante los días 8 y 10 de febrero del año en curso, los términos en los procedimientos administrativos, según lo establecido en el Título V de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

**Artículo 7.** Este Decreto Ejecutivo empezará a regir a partir de su promulgación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en la ciudad de Panamá, a los *Quince* (15) días del mes de  *Enero* de dos mil dieciséis (2016).



**JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ**  
Presidente de la República



**MILTON HENRÍQUEZ**  
Ministro de Gobierno







## *República de Panamá*

### AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. *9514* -Elec

Panamá, *30 de diciembre* de 2015

“Por la cual se concede una dispensa a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) del cumplimiento del Artículo 82, Título V del Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, denominado Régimen de Suministro aprobado mediante la Resolución AN No. 411-Elec de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones.”

#### EL ADMINISTRADOR GENERAL

en uso de sus facultades legales,

#### CONSIDERANDO:

1. Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006 se reorganizó la estructura del Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, encargado de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la de transmisión y distribución de gas natural;
2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones, “Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad,” y sus modificaciones, establecen el régimen al cual se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;
3. Que esta Autoridad Reguladora mediante Resolución AN No. 411-Elec de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones, aprobó el Título V del Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, denominado Régimen de Suministro;
4. Que el Artículo 82 del Título V del Régimen de Suministro para el Servicio Público de Distribución y Comercialización de electricidad indica lo siguiente:

*“Artículo 82 La empresa distribuidora deberá mantener información respecto al tipo de actividad del cliente que solicita una conexión del suministro eléctrico (residencial, comercial e industrial) y respecto a la actividad económica a la que se dedica el cliente comercial e industrial, tales como aeropuertos, puertos, hoteles, escuelas, bancos, mineras, cementeras, hospitales, clínicas o centros de salud, empresas agrícolas, restaurantes, salones de belleza, locales dedicados al comercio u oficinas, y el resto clasificado como otros. Especificar además cuando es una entidad del Gobierno y en el caso de que sea una industria o fábrica solicitar que la misma indique a qué actividad se dedica. Con esta información se deberá alimentar la base de datos comercial o una base de datos suplementaria.*

*Para iniciar con la recolección de esta información deberá realizar un censo durante los primeros seis (6) meses de aprobada esta reglamentación, la que deberán presentar a la ASEP a más tardar el 31 de diciembre de 2015. De allí en adelante, dicha base de datos deberá mantenerse actualizada, de forma tal que se cuente con la misma para la presentación de esta información junto a la información estadística enviada por los prestadores en el formulario E-120 que corresponda. Los clientes deberán dar la información solicitada sobre su actividad.”(Énfasis suplido)*

*[Handwritten signatures and initials]*



Resolución AN No. **9514**-Elec  
de **30** de **diciembre** de 2015  
Página 2 de 2

Que la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., (en adelante EDEMET-EDECHI), mediante nota RM-0410-15 de 15 de diciembre de 2015, solicitó una dispensa para no cumplir con lo dispuesto en el artículo 82 del Régimen de Suministro y así poder recolectar la información requerida a los clientes dentro de un plazo adicional de seis meses al establecido en la Resolución AN No.8289-Elec de 5 de febrero de 2015. Dicha solicitud fue fundamentada en los siguientes hechos:

- 5.1. La regulación vigente no establece como requisito obligatorio que los clientes informen su tipo de actividad económica, y dicho requisito solo lo exigían a los clientes residenciales.
  - 5.2. Tomaron medidas para actualizar la base de datos de los clientes existentes, por lo cual se encuentran levantando un censo cliente a cliente.
  - 5.3. Producto de lo extenso del territorio nacional, han tenido inconveniente para la recolección de dichos datos.
  - 5.4. Otro inconveniente que han tenido, es que han encontrado una cantidad de clientes que no mantienen actualizados los contactos telefónicos, lo que los obliga a recolectar la información en campo.
6. Que una vez analizada la solicitud de prórroga del plazo para presentar la información recolectada del censo, esta Autoridad ha considerado viable la solicitud, por lo que,


#### RESUELVE:

**PRIMERO: DISPENSAR** a más tardar hasta el 30 de junio del 2016 a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) del cumplimiento del Artículo 82, Título V del Reglamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, denominado Régimen de Suministro aprobado mediante la Resolución AN No. 411-Elec de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones.

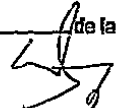
**SEGUNDO: ADVERTIR** que la presente Resolución rige a partir de su notificación y la misma sólo admite el recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.



**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006; Ley 6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998; Resolución AN No. 411-Elec de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ROBERTO MEANA MELÉNDEZ**  
Administrador General

En Panamá a los treinta y uno (31) días  
del mes diciembre de 2015  
a las 9:48 de la mañana  
Notifico al Sr. Concepción Camp de la  
Resolución que antecede.

  
2.542381  
Edemet

Segundo el día 31 de  
diciembre de 2015 a las 9:45 de la  
mañana se notifica a  
Cristina Camy S de la  
resolución que antecede.  
J. 442 Hs  
Cedeñi

El presente Documento es fiel copia de su Original Según  
Consta en los archivos centralizados de la Autoridad  
Nacional de los Servicios Públicos.

Dado a los 06 días del mes de 01 de 20 16

  
FIRMA AUTORIZADA

*República de Panamá*

## AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. 9516 -ElecPanamá 30 de diciembre de 2015

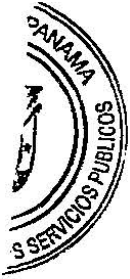
“Por la cual se aprueba modificaciones a la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pagos (MGP)”.

**EL ADMINISTRADOR GENERAL,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

1. Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la estructura del Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en adelante ASEP), organismo autónomo del Estado, encargado de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural;
2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad", establece el régimen al que se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;
3. Que tal como lo establece el artículo 61 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, antes referida, el Servicio Público de Operación Integrada del Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN), es responsabilidad del Centro Nacional de Despacho (en adelante CND), dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.;
4. Que mediante Resolución JD-605 de 24 de abril de 1998 y sus modificaciones, se aprobaron las Reglas Comerciales del Mercado Mayorista de Electricidad (en adelante Reglas Comerciales);
5. Que el numeral 1.1.1.4 de las Reglas Comerciales establece que la implementación de dicha norma se realizará a través de Manuales Detallados de Procedimiento, denominados **Metodologías de Detalle**, los cuales serán desarrollados por el CND con el apoyo del Comité Operativo y la colaboración de los Participantes del Mercado. Dichas Metodologías deberán respetar los criterios, principios y procedimientos generales que se establecen en las referidas Reglas Comerciales y contener todo el detalle necesario para garantizar predictibilidad y transparencia, así como para evitar conflictos de interpretación;
6. Que el Centro Nacional de Despacho (en adelante CND) sometió a consideración del Comité Operativo en la Sesión Ordinaria No.333, celebrada el día 15 de septiembre de 2015, modificaciones a la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pago (MGP);
7. Que el numeral 15.4.1.7 de las referidas Reglas Comerciales indica que el procedimiento para elaboración o ajuste y aprobación de una Metodología es el siguiente:

Resolución AN No. 9516 -Elec  
Panamá, 30 de Diciembre de 2015  
Página N° 2



- a) "Las propuestas o modificaciones de Metodologías las elaborará el CND, quien puede solicitar apoyo al Comité Operativo. Una vez se tengan las propuestas, las mismas deberán ser presentadas al Comité Operativo mediante un informe que incluya su justificación y las reglas cuyo detalle implementa.
  - b) El Comité Operativo tendrá un plazo no mayor de 20 días calendario después de recibido el informe del CND para aprobar, modificar o rechazar las propuestas, lo cual hará a través de un Informe de Metodología que será remitido al CND. Excedido este plazo sin que se presente el referido informe, se entenderá que el Comité Operativo está de acuerdo con la propuesta del CND.
  - c) El CND, en un plazo no mayor de 7 días calendario después de recibido el informe del Comité Operativo, remitirá a la ASEP el Informe Final de Metodología, el cual incluirá el informe del Comité Operativo y las observaciones y/o comentarios que tenga a dicho informe.
8. Que en cumplimiento del literal b) del numeral 15.4.1.7, el Comité Operativo aprobó con modificaciones la propuesta presentada por el CND, y mediante la Nota CO-034-2015 de 23 de septiembre de 2015, remitió al CND la referida propuesta de modificación de la Metodología para la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pagos (MGP);
  9. Que en atención al literal c) de la norma antes descrita, el CND, en tiempo oportuno, mediante nota ETE-DCND-066-2015 de 19 de octubre de 2015, remitió a esta Autoridad Reguladora, el Informe Final de Metodología No. CND-015-2015, relacionado con la propuesta de modificación de la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pagos (MGP);
  10. Que esta Autoridad Reguladora considera que la propuesta presentada por el CND, cumple con los requisitos establecidos en las Reglas Comerciales, por lo que,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: APROBAR** la modificación de los numerales MGP.10.1 y MGP.13.2 de la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pagos (MGP), los cuales quedarán así:

*MGP.10.1.: Ante el incumplimiento de pago por parte de un Participante, el CND debe cubrir, en primer lugar la falta de pago con retiros de la garantía. El participante debe reponer el monto correspondiente en un plazo no mayor a 30 días después de su ejecución. (Numeral 14.10.1.9 de las Reglas Comerciales). En tanto no lo haga, seguirá siendo considerado como deudor moroso del Mercado por el monto a reponer. (Numeral 14.10.1.10 de las Reglas Comerciales). El incumplimiento de pago por parte del Participante podrá ser íntegro o parcial.*

*MGP.13.2: Antes de liberar la garantía, CND/ETESA se asegurará de que el Participante haya cumplido con todas las obligaciones y que haya pagado todas sus deudas derivadas de sus transacciones en el mercado ocasional local o en el MER. Una vez finalice esta verificación, el CND notificará al participante y a partir de la misma, el CND/ETESA contará con un término de 30 días para liberar la Garantía de Pago.*

**SEGUNDO: ORDENAR** al Centro Nacional de Despacho que en un período no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la promulgación de la presente Resolución, elabore

de Cep

X  
R



Resolución AN No. 9516 -Elec  
Panamá, 30 de diciembre de 2015  
Página N° 3

y publique en la página web del CND un Texto Unificado de la citada metodología, introduciendo el cambio dispuesto en el resuelto **PRIMERO** de esta Resolución.

**TERCERO: COMUNICAR** al Centro Nacional de Despacho que las modificaciones a la Metodología para la Determinación de las Garantías de Pagos (MGP), entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente Resolución.


**CUARTO: ADVERTIR** que contra la presente Resolución cabe el Recurso de Reconsideración, el cual debe interponerse dentro del término de cinco (5) días hábiles, siguientes a su notificación.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ley No.26 de 29 de enero de 1996 y sus modificaciones; Texto Único de la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998; Resolución JD-605 de 24 de abril de 1998, sus modificaciones y demás disposiciones concordantes.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ROBERTO MEANA MELÉNDEZ**  
Administrador General

En Panamá a los cuatro (4) días  
del mes enero de 2016,  
a las 02:55 pm de la Tarde  
Notifico al Sr. ANTONIO GUELEI de la  
Resolución que antecede.

  
8-203-5009

El presente Documento es fiel copia de su Original Según  
Consta en los archivos centralizados de la Autoridad  
Nacional de los Servicios Públicos.

Dado a los 06 días del mes de 01 de 20 16

  
FIRMA AUTORIZADA





## *República de Panamá*

### AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN No. 9517 -Elec

Panamá, 30 de diciembre de 2015

“Por la cual se aprueba modificaciones a la Metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido por los Criterios de Calidad y como se Asigna (MSA)”.

**EL ADMINISTRADOR GENERAL,**  
en uso de sus facultades legales,

#### **CONSIDERANDO:**

1. Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la estructura del Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en adelante ASEP), organismo autónomo del Estado, encargado de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural;
2. Que la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad", establece el régimen al que se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad;
3. Que tal como lo establece el artículo 61 del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, antes referida, el Servicio Público de Operación Integrada del Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN), es responsabilidad del Centro Nacional de Despacho (en adelante CND), dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.;
4. Que mediante Resolución JD-605 de 24 de abril de 1998 y sus modificaciones, se aprobaron las Reglas Comerciales del Mercado Mayorista de Electricidad (en adelante Reglas Comerciales);
5. Que el numeral 1.1.1.4 de las Reglas Comerciales establece que la implementación de dicha norma se realizará a través de Manuales Detallados de Procedimiento, denominados **Metodologías de Detalle**, los cuales serán desarrollados por el CND con el apoyo del Comité Operativo y la colaboración de los Participantes del Mercado. Dichas Metodologías deberán respetar los criterios, principios y procedimientos generales que se establecen en las referidas Reglas Comerciales y contener todo el detalle necesario para garantizar predictibilidad y transparencia, así como para evitar conflictos de interpretación;
6. Que el Centro Nacional de Despacho (en adelante CND) sometió a consideración del Comité Operativo en la Sesión Ordinaria No.336, celebrada el día 12 de noviembre de 2015, modificaciones a la metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar a los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido por los Criterios de Calidad y como se Asigna (MSA);
7. Que el numeral 15.4.1.7 de las referidas Reglas Comerciales indica que el procedimiento para elaboración o ajuste y aprobación de una Metodología es el siguiente:

Resolución AN No. 9517 -Elec  
Panamá, 30 de diciembre de 2015  
Página N° 2



- a) "Las propuestas o modificaciones de Metodologías las elaborará el CND, quien puede solicitar apoyo al Comité Operativo. Una vez se tengan las propuestas, las mismas deberán ser presentadas al Comité Operativo mediante un informe que incluya su justificación y las reglas cuyo detalle implementa.
  - b) El Comité Operativo tendrá un plazo no mayor de 20 días calendario después de recibido el informe del CND para aprobar, modificar o rechazar las propuestas, lo cual hará a través de un Informe de Metodología que será remitido al CND. Excedido este plazo sin que se presente el referido informe, se entenderá que el Comité Operativo está de acuerdo con la propuesta del CND.
  - c) El CND, en un plazo no mayor de 7 días calendario después de recibido el informe del Comité Operativo, remitirá a la ASEP el Informe Final de Metodología, el cual incluirá el informe del Comité Operativo y las observaciones y/o comentarios que tenga a dicho informe.
8. Que en cumplimiento del literal b) del numeral 15.4.1.7, el Comité Operativo aprobó la propuesta presentada por el CND, y mediante la Nota CO-038-2015 de 24 de noviembre de 2015, remitió al CND la referida propuesta de modificación a la Metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar a los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido por los Criterios de Calidad y como se Asigna (MSA);
9. Que en atención al literal c) de la norma antes descrita, el CND, en tiempo oportuno, mediante nota ETE-DCND-071-2015 de 27 de noviembre de 2015, remitió a esta Autoridad Reguladora, el Informe Final de Metodología No. CND-018-2015, relacionado con la propuesta de modificación de la Metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar a los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido por los Criterios de Calidad y como se Asigna (MSA);
10. Que esta Autoridad Reguladora considera que la propuesta presentada por el CND, cumple con los requisitos establecidos en las Reglas Comerciales, por lo que,

#### RESUELVE:

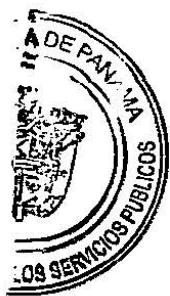
**PRIMERO: APROBAR** la modificación del artículo MSA.3.3.4. de la Metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar a los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido por los Criterios de Calidad y Como se Asigna (MSA), el cual quedará así:

*MSA.3.3.4: Para calificar una unidad para aportar regulación secundaria la misma debe cumplir con lo establecido en MDP.3.6 del Reglamento de Operación.*

**SEGUNDO: ORDENAR** al Centro Nacional de Despacho que en un período no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la promulgación de la presente Resolución, elabore y publique en la página web del CND un Texto Unificado de la citada metodología, introduciendo el cambio dispuesto en el resuelto **PRIMERO** de esta Resolución.

**TERCERO: COMUNICAR** al Centro Nacional de Despacho que las modificaciones a la Metodología para la Determinación de los Requisitos Técnicos para aportar a los Servicios Auxiliares del Sistema, Determinación del Nivel del Servicio Auxiliar del Sistema Requerido





Resolución AN No. 9517-Elec  
Panamá, 30 de diciembre de 2015  
Página N° 3

por los Criterios de Calidad y Como se Asigna (MSA), entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente Resolución.

**CUARTO: ADVERTIR** que contra la presente Resolución cabe el Recurso de Reconsideración, el cual debe interponerse dentro del término de cinco (5) días hábiles, siguientes a su notificación.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ley No.26 de 29 de enero de 1996 y sus modificaciones; Texto Único de la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998; Resolución JD-605 de 24 de abril de 1998 y sus modificaciones; y demás disposiciones concordantes.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

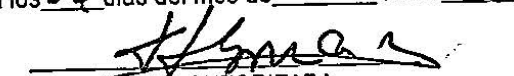
  
**ROBERTO MEANA MELÉNDEZ**  
Administrador General, Encargado

En Panamá a los cuatro (4) días  
del mes enero de 2016  
a las 02:50 pm de la tarde  
Notifico al Sr. ANTONIO GUELF de la  
Resolución que antecede.

  
8-203-500

El presente Documento es fiel copia de su Original Según  
Consta en los archivos centralizados de la Autoridad  
Nacional de los Servicios Públicos.

Dado a los 06 días del mes de 01 de 20 16

  
FIRMA AUTORIZADA

52

## REPÚBLICA DE PANAMÁ



## ÓRGANO JUDICIAL

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

Panamá, veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015).

**VISTOS:**

La licenciada María Márquez Gordón, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. AL-002-11 de 5 de enero de 2011, emitida por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá.

Una vez ingresado el expediente y adjudicado al Magistrado Sustanciador, se emitió pronunciamiento en cuanto a la solicitud de suspensión del acto administrativo atacado, previo a su admisibilidad, mismo que no accedió a lo planteado. (Cfr. 14 a 17)

Posteriormente, a través del Auto de diecinueve (19) de diciembre de 2013, se admitió la demanda en cuestión, requiriendo a la entidad demandada, la rendición de un informe de conducta dentro del término de 5 días, su traslado al Procurador de la Administración y la apertura de la causa a pruebas, por igual término. (Cfr. 19)

**LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.**

En la demanda se formula una pretensión que consiste en que, esta Sala declare la nulidad por ilegal, de la Resolución N° AL-002-11 de 5 de enero de

2011, emitida por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la cual ordena la remoción inmediata de todas aquellas estructuras y anuncios publicitarios ubicados dentro de las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional que se encontraban sin la aprobación de la viabilidad para mantenerlas instaladas, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11 de 2006.

Arguye la parte actora, que la precitada Ley establece en el último párrafo de su artículo 4, que una vez cumplido el término de seis (6) meses sin mediar aprobación de viabilidad del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía respectiva, se ordenaría la remoción inmediata de las estructuras publicitarias referidas; sin embargo, tal orden solo puede dictarse por el Alcalde correspondiente, previa solicitud del Ministerio de Obras Públicas.

La anterior competencia obedece a que, la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, así como su consiguiente reglamentación a través del artículo 4 del decreto No. 1768 de 5 de septiembre de 2000, le otorga al Alcalde la reglamentación de las áreas que han sido decretadas de su propiedad y faculta a dicha autoridad administrativa, ya sea de oficio o a solicitud de parte interesada, a la revocatoria de los permisos de instalación y consecuente remoción de las estructuras publicitarias instaladas, a fin de garantizar la seguridad vial y el tránsito, esto sin detrimento de que es el Ministerio de Obras Públicas quien reglamente tales aspectos a nivel nacional.

Por su parte, el recurrente estima que la resolución atacada de ilegal, al ser de efecto erga omnes, no individualiza la afectación particular experimentada en cada caso, y por ende, no puede avalar la remoción de vallas por razones de seguridad vial y tránsito.

Por último, el acto administrativo in comento no solo infringe Leyes y Acuerdos Municipales de mayor jerarquía, sino que incumple lo preceptuado



en la Ley 38 de 2000, revocando de forma indirecta permisos para la instalación de vallas y anuncios publicitarios otorgados por el Municipio dentro de sus facultades legales, para lo que no está autorizado el Ministerio de Obras Públicas, más allá de reglamentar la seguridad vial y de tránsito acorde a los parámetros legales existentes y a la jurisprudencia, distinguiendo las diferencias entre una y otra entidad administrativa.

Como disposiciones legales infringidas y el concepto de las mismas, la parte actora señala las siguientes :

- Artículo 69 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, específicamente los numerales 1 y 2, excerta que literalmente acota:

“Artículo 69: El Patrimonio Municipal esta constituido por el conjunto de bienes, rentas, impuestos, derechos, acciones y servicios pertenecientes al Municipio. De modo concreto lo integran:

1. Como bienes de uso público, las calles, avenidas, parques y plazas, paseos, caminos, puentes, fuentes y arbolado siempre que no pertenezcan a la nación;

2. Todos los bienes que hayan adquirido por cualquier título así como los que le corresponde según la Ley;

.....”

La norma citada se estima violada directamente por omisión, debiendo consecuentemente, ser competencia exclusiva del Municipio la concesión de permisos correspondientes a la colocación de anuncios publicitarios dentro de su territorio.

- Artículo 4 del Decreto No. 1768 de 6 de septiembre de 2000, considerado vulnerado directamente por omisión, toda vez que, al ser el Alcalde, quien otorgó los permisos necesarios para la colocación de anuncios publicitarios que en su momento se encontraban instalados dentro de la propiedad del Municipio, le corresponde igual manera ordenar su remoción y no así el Ministro de Obras Públicas a través de una resolución de efectos generales.

“Artículo 4: A efecto de garantizar la seguridad vial y el tránsito, las

personas naturales o jurídicas que se les autorice la instalación de estructuras publicitarias, deben dispensar estricta observancia a las normas, medidas y retiros que al efecto exigen las autoridades competentes de Obras Públicas, Dirección de Aeronáutica Civil, Autoridad Regional Interoceánica, etc.

La inobservancia de tales exigencias dará lugar a que el Alcalde del Distrito, de oficio o a petición de parte interesada, proceda a la revocatoria del permiso concedido y consecuente con la remoción de la estructura publicitaria instalada; ello sin perjuicio de la sanción pecuniaria a que se refiere el Artículo Vigésimo Sexto del Acuerdo Municipal No. 72 de 26 de junio de 2000."

- Artículo 34 de la Ley 38 de julio de 2000, acusado de violación directa por omisión, al representar un menoscabo al debido proceso en todas las actuaciones administrativas, dado el procedimiento enunciado al respecto.

"Artículo 34: Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y las Directoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velará, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.

Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada."

### **INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA.**

Mediante Nota DM-AL-No.4002 de 27 de diciembre de 2013, el Ministro de Obras Públicas para dicha fecha, Jaime Ford Castro, vierte su informe de conducta en concordancia con lo dimanado en el artículo 57 de la Ley 135 de 1943, partiendo con el enunciado del artículo 4 de la Ley 11 de 27 de abril de 2006 que reforma la Ley 35 de 1978, por la cual se reorganiza el Ministerio de Obras Públicas; excerta que deja claro el derecho y obligación de dicha entidad, de velar por la seguridad vial y el tránsito a nivel nacional,



prohibiendo de manera categórica la instalación de estructuras, anuncios publicitarios o construcciones de cualquier otra índole en las servidumbres viales y pluviales en el territorio patrio.

Sin embargo, la norma in comento concedió un plazo de seis (6) meses a todas aquellas empresas que mantenían estructuras y anuncios publicitarios, con el propósito de que obtuvieran la aprobación de viabilidad para mantenerlas, dicho plazo comprendía del 2 de mayo de 2006 al 2 de noviembre del mismo año. De manera que, de no regularse su estatus acorde a lo enunciado, se estaba transgrediendo una norma que incluso ya ha sido objeto de pronunciamiento de constitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 31 de marzo de 2008, resultando por ende de forzoso cumplimiento.

Resalta el servidor público demandado, que es función del Ministerio de Obras Públicas en el caso que nos ocupa, impedir la colocación de estructuras o anuncios publicitarios en las servidumbres viales y/o pluviales, no así el cobro por los permisos concedidos por los Municipios entorno a ellos, pues así ha quedado claro no solo en la excerta in examine, sino también en el Decreto No. 687 de 11 de octubre de 1944 en su artículo 5, resaltando lo siguiente:

“Artículo 5. En las carreteras transístmicas construidas o que se proyectan, la línea de construcción estará a una distancia no menor de treinta (30) metros, a ambos lados del eje central, reservándose de esta manera una faja de servidumbre de sesenta (60) metros, dentro de la cual queda absolutamente prohibido toda clase de construcción, salvo las líneas telegráficas, telefónicas y las de transmisión eléctrica que autorice el Ministerio de Salubridad y Obras Públicas”.

Por su parte, hace mención a los pronunciamientos de constitucionalidad proferido por la Corte Suprema de Justicia con relación al artículo 4 de la Ley 11 de 2006, al igual que sobre la legalidad de la

Resolución No.069-06 de 5 de julio de 2006, que la reglamenta, externando que mediante la primera pieza adjetiva no se vulnera de manera alguna el derecho de los Municipios a regular, reglamentar y emitir pautas en materia de instalación y remoción de estructuras publicitarias, siempre y cuando éstas se encuentren en lugares permitidos por Ley. De igual manera, acota que el artículo 8 del Código Fiscal, dispone que los bienes nacionales destinados al uso, o la prestación de un servicio público, serán administrados por el Misterio o entidad correspondiente, en este caso las servidumbre viales y pluviales le corresponden al Ministerio de Obras Públicas.

En otro orden de ideas, resalta que la resolución atacada de ilegalidad es de mero obedecimiento, tiene la finalidad de ejecutar algo reglamentado en la Ley 11 de 2006, de manera que, debió ser contra este último cuerpo legal que debió recaer los descargos de ilegalidad, ya que incluso el artículo 163 de la Ley 38 de 2000, establece que solo las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquellas de mero trámite, que directa o indirectamente conlleven la misma decisión, le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ella mediante los recursos correspondientes.

A modo de corolario, estima el funcionario demandado que la Resolución No. AL-002-11 de 5 de enero de 2011, no ha violentado la legalidad, quedando desvirtuados los cargos que se le endilgan, solicitando en consecuencia, su desestimación. (Cfr. 21 a 25)

#### **OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.**

Por su parte, la Procuraduría de la Administración emitió concepto mediante la Vista N° 200 de 14 de abril de 2015, resaltando que el debate

jurídico en este caso se centra en determinar la competencia del Ministerio de Obras Públicas para emitir la Resolución de mero obedecimiento AL-002-11 de 5 de enero de 2011, a través de la cual ordenó la remoción de las estructuras y avisos publicitarios que estuvieran instalados en contravención a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 11 de 2006, esta última que se trata de un acto administrativo de carácter general y que deja entrever los siguientes aspectos:

- 1) Que sobre las servidumbres viales o pluviales no se puede instalar ningún tipo de infraestructuras, salvo que sean destinadas a los servicios públicos, en la forma que determine el Ministerio de Obras Públicas;
- 2) Que los Municipios solo tienen competencia para otorgar permisos para instalar anuncios o estructuras publicitarias en los lugares permitidos;
- 3) Que las estructuras y los anuncios publicitarios instalados al momento de entrada en vigencia de esa ley y que tuviesen el respectivo permiso Alcaldicio de instalación, tendrán un plazo de seis (6) meses, para obtener del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía, la respectiva aprobación de viabilidad para mantenerse instalados; y
- 4) Cumplido ese plazo sin que se hubiera obtenido la aprobación, se ordenaría su inmediata remoción.

Resalta a su vez, que la norma in examine fue declarada constitucional mediante Sentencia de 31 de marzo de 2008, quedando reconocida la facultad que tiene el Ministerio de Obras Públicas para velar por el cumplimiento de lo allí dispuesto. Por ende, luego de transcurrido en exceso el plazo contemplado en dicho instrumento legal, se resolvió lo contemplado en el acto atacado de ilegal en esta oportunidad.



54

De igual manera, expone la Procuraduría en relación a dicho acto, que el mismo fue objeto de pronunciamiento constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien en Sentencia de 13 de marzo de 2012, resultando los criterios allí soslayados de gran relevancia al caso, pues deja entrever que la resolución de mero obedecimiento AL-002-11 de 5 de enero de 2011, fue emitida con asiento en las facultades que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas de conformidad con la Ley 11 de 2006, además de no infringir los artículos 69 de la Ley 106 de 1973 (numerales 1 y 2); 4 del Decreto Ejecutivo 1768 de 2000 y 34 y 62 de la Ley 38 de 2000, por lo que inquietan declarar que, NO ES ILEGAL la resolución in comento dictada por el Ministerio de Obras Públicas. (Fjs. 34 a 43)

#### **DECISIÓN DE LA SALA.**

Verificados los trámites establecidos por Ley, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia.

Observa esta Superioridad, que el acto administrativo atacado, lo es la Resolución de Mero Obedecimiento No. AL-002-11 de 5 de enero de 2011, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, en la que se resolvió entre otras cosas, ordenar la remoción inmediata de todas aquellas estructuras y anuncios publicitarios ubicados dentro de las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, en contravención a lo normado en el artículo 4 de la Ley 11 de 2006, a excepción de las servidumbres viales de los Corredores Norte y Sur y de la Autopista Madden-Colón, disponiendo plazos perentorios para que los propietarios de las estructuras en referencia, procedieran a su remoción.

Como podemos precisar, la resolución in examine se trata de aquellas contempladas bajo el numeral 92 del artículo 201 de la Ley 38 de 2001,

siendo de efectos generales, de mero obedecimiento y cumplimiento inmediato; por ende, a través de su expedición quedaba agotada la vía gubernativa, permitiendo la procedencia de nuestro escrutinio a través de la demanda contenciosa administrativa de nulidad incoada por la parte actora.

Como disposiciones infringidas por violación directa en su modalidad de omisión, se enlistan los artículos 69 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, 4 del Decreto No. 1768 de 6 de septiembre de 2000 y el artículo 34 de la Ley 38 de 2001, orientados a resaltar la condición de bienes municipales, de las servidumbres enunciadas, y la facultad Alcaldicia para decretar a solicitud de parte interesada o de oficio, la revocatoria del permiso concedido y consecuente remoción de las estructuras publicitarias instaladas; y por último, la vulneración del debido proceso administrativo aplicable en estos casos, pues es el Alcalde a quien le corresponde esto último.

Referido lo anterior, cabe reseñar que dicha resolución lleva por objeto ejecutar lo normado en la Ley 11 de 2006, específicamente en su artículo 4, excerta legal que reorganiza el Ministerio de Obras Públicas, modificando la Ley 35 de 30 de junio de 1978 y la Ley N° 94 de 1973 (sobre contribución por valorización), y que en dicho artículo prohíbe la instalación de estructuras y anuncios publicitarios en servidumbres viales y pluviales, disponiendo un plazo de seis (6) meses, a partir de su entrada en vigencia, destinado a que las propietarios de tales estructuras establecidas en los lugares en mención con permiso previo, obtuviesen del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía, la respectiva aprobación de viabilidad para mantenerse instalados.

En este punto, consideramos relevante acotar que los argumentos de ilegalidad que la parte actora le endilga a la resolución acusada, guardan



estrecha relación con la facultad, que a su criterio ostenta el Alcalde en cuanto a la concesión y remoción de estructuras publicitarias, debiendo entonces el Ministerio de Obras Públicas hacer un análisis individualizado de cada una de los anuncios publicitarios situados en servidumbres públicas y externar su solicitud al Alcalde, de considerar la existencia probada de alguna infracción.

En torno a tal premisa, avistamos que tales razonamientos aparentemente pretenden cuestionar la potestad que la Ley 11 de 2006, afianza en el Ministerio de Obras Públicas, alusiva al control y manejo de las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, aspecto que no solo escapa del objeto de la acción contenciosa incoada, sino que ya fue materia de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 4 del aludido cuerpo normativo, resuelta a través de Sentencia de 31 de marzo de 2008, de la cual podemos resaltar lo siguiente:

"...el contenido de la norma demandada, como bien señala el Procurador de la Administración no le quita la potestad a los gobiernos locales de autorizar el uso de las servidumbres municipales, más bien lo que pretende es mantener la seguridad vial y del tránsito en todo el país, puesto que la disposición acusada tiene su aplicación en el ámbito nacional y no en determinado distrito. Por tanto, la norma es consecuencia del ejercicio de una función del Estado, creada a través del órgano productor de la norma jurídica y ejecutada por una entidad administrativa (Ministerio de Obras Públicas), que forma parte del Órgano Ejecutivo ... esta Corte considera que al dar la norma tal facultad al Ministerio de Obras Públicas, no va en contra de la autonomía dada por la Constitución a los gobiernos locales, como señala el activador constitucional ...

De allí que, esta Corte coincide con el planteamiento esbozado por el Procurador de la Administración, al señalar que al crear la norma en cuestión la Asamblea Nacional emite una normativa legal que viene a formar parte de las disposiciones sobre Policía General (Policía Material), las cuales pueden ser creadas por este Órgano del Estado, en función de las atribuciones dadas por la Constitución, en búsqueda, como es el presente caso, de garantizar la seguridad vial y del tránsito en todo el territorio nacional, en función a lo que establece los artículos 1, 2 y 3 literales a, b y c, de la Ley 35 de 30 de

60

junio de 1978 (Por la cual se reorganiza el Ministerio de Obras Públicas) ...

Así que, no se puede desconocer que la norma bajo examen mantiene la facultad dada a los municipios de autorizar los permisos para la instalación de las referidas estructuras; ... es claro que lo establecido en el contenido del párrafo del artículo demandado, es garantizar la seguridad vial y del tránsito, al requerir luego de la vigencia de la Ley, la obtención del trámite antes mencionado, lo que a criterio de esta Corte no va en contra del contenido de los artículos 246 numeral 1 y 243 de la Constitución (el primero se refiere a los ingresos de los municipios y el segundo respecto a la descentralización de los gobiernos locales) ...".

En resumen, de un análisis de la normativa legal citada, así como del pronunciamiento esbozado por el Tribunal Constitucional patrio, queda claro que al Ministerio de Obras Públicas le corresponde por Ley garantizar y mantener la seguridad vial y de tránsito en todo el territorio nacional, tal como lo dispone la Ley N° 11 de 2006, que reforma la Ley 35 de 1978 (que reorganiza el Ministerio de Obras Públicas). De igual forma, indicó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que dichas funciones no atentan contra las normas constitucionales que garantizan la autonomía y descentralización municipal así como las fuentes de ingresos de las Corporaciones municipales.

Es más, recientemente en alusión a demanda contenciosa administrativa de nulidad incoada contra la misma resolución que nos ocupa en esta oportunidad, esta Sala expuso su legalidad en torno a los argumentos endilgados en ese momento, pues obedeció a un mandato contenido en una norma de mayor jerarquía (Ley 11 de 2006, artículo 4), deviniendo en la observancia de un procedimiento previamente establecido, refiriéndose así:

"En relación a las referencias anotadas, este Tribunal Colegiado estima que no le asiste razón al actor, ya que el fundamento jurídico para la expedición de la actuación censurada, obedece al cumplimiento de la ordenanza contenida en el Parágrafo del Artículo



63

4 de la Ley N° 11 de 27 de abril de 2006, según lo cual, se había otorgado un plazo de hasta seis (6) meses para que las empresas que tuviesen instaladas estructuras o anuncios publicitarios, en las servidumbres viales y pluviales del país, regularizaran su status, obteniendo para ello una aprobación de viabilidad." (Sala Tercera, Demanda Contenciosa Administrativa, Juan A Kuan Guerrero vs Ministerio de Obras Públicas, fallo de 22 de abril de 2015)

De este modo, podemos colegir que la Resolución de Mero Obedecimiento No. AL-002-11 de 5 de enero de 2011, fue dictada en cumplimiento o ejecución de un mandato soslayado en una norma superior (artículo 4 de la Ley 11 de 2006), excerta que ya fue declarada constitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que acentúa la facultad del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto al control de la seguridad vial y del tránsito en el territorio nacional, incluyendo las servidumbres de esta índole, por ende, no contraviene las normativas invocadas.

En adición a la potestad supracitada, contrario al procedimiento que el demandante estima aplicable a la remoción de vallas y estructuras publicitarias en las servidumbres enunciadas, el propio Ministerio de Obras Públicas reglamentó a través de Resolución No.069-06 de 5 de julio de 2006, el régimen de servidumbres públicas y sanciones por infracciones al artículo 4 de la Ley 11 de 2006, quedando nuevamente expreso que dentro de sus facultades se encuentra ordenar la remoción y/o demolición de las edificaciones que no constituyan estructuras para servicios públicos, resaltando los siguientes artículos:

"ARTÍCULO PRIMERO: Las personas naturales o jurídicas que instalen estructuras y anuncios publicitarios o cualquier otra edificación en las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, que no constituyan infraestructura para los servicios públicos, a partir del 2 de mayo de 2006, fecha de entrada en vigencia de la Ley 11 de 2006, serán sancionadas con multa de cinco mil Balboas (B/.5,000.00) a cien mil Balboas (B/.100,000.00), según la gravedad de la falta.

64

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordenará la remoción y/o demolición, a costa del infractor, de las estructuras, anuncios publicitarios o de cualquier otra edificación que hayan sido instalados o se construyan sobre las servidumbres viales o pluviales a nivel nacional, que no constituyan infraestructura para los servicios públicos, a partir del 2 de mayo de 2006, fecha de entrada en vigencia de la Ley 11 de 27 de abril de 2006, para lo cual las personas naturales o jurídicas contarán con un término de treinta (30) días calendario, a partir de la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Oficial.

ARTÍCULO TERCERO: Transcurridos los treinta (30) días calendario de que trata el artículo anterior sin que el infractor haya removido y/o demolido las estructuras, anuncios publicitarios o cualquier otra edificación que hayan sido instalados o contruidos sobre las servidumbres viales o pluviales, a nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas procederá a su remoción y/o demolición.

Los gastos en que incurra el Ministerio de Obras Públicas en la remoción y/o demolición de las estructuras y anuncios publicitarios o de cualquier otra edificación correrán por cuenta de las personas naturales o jurídicas propietarias de las mismas y el cobro de dichos costos en caso de incumplimiento en el pago se hará efectivo a través de la jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO CUARTO: A las personas naturales o jurídicas que reincidan en la instalación de estructuras, anuncios publicitarios o de cualquier otra edificación sobre las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 11 de 2006, se les impondrá una multa que representará el doble de la impuesta con anterioridad, hasta un máximo de cien mil Balboas (B/.100,000.00)."

La resolución citada, fue declarada legal a través de pronunciamiento previo de esta Magistratura, reconociendo que la misma surge en virtud de la facultad reglamentaria que ostenta el Ministerio de Obras Públicas, en una materia que como ya hemos desarrollado ampliamente, es de su competencia, valiéndonos plasmar el ulterior extracto de dicha pieza procesal:

"Ahora bien, es preciso resaltar que la Resolución N° 069-06 de 5 de julio de 2006, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, es de carácter estrictamente reglamentario, es decir, desarrolla la Ley N° 11 de 2006, que reforma la Ley 35 de 1978 (que reorganiza el Ministerio de Obras Públicas), por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la seguridad vial y del tránsito, en las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, que no constituyan infraestructura para los servicios públicos. En ese sentido, la norma de rango legal que da existencia jurídica al acto administrativo demandado es el artículo 4 de



la citada Ley N° 11 de 2006, citado en párrafos anteriores, y objeto de pronunciamiento de constitucionalidad por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al examinar el contenido de ambas normativas (la Resolución N° 069-06 de 5 de julio de 2006, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, y el artículo 4 de la Ley N° 11 de 2006, que reforma la Ley 35 de 1978, que reorganiza el Ministerio de Obras Públicas), es claro que la disposición reglamentaria no contraría el texto de la norma que le precede en jerarquía." (Sala Tercera, Demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, Asociación Unión de Productores de Publicidad Exterior (UPPEX) vs Ministerio de Obras Públicas, Fallo de 7 de abril de 2015)

De esta forma, quedan desestimados los cargos de violación endosados contra las normas enunciadas en la demanda, toda vez que no se ha logrado desvirtuar la legalidad del acto administrativo impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. AL-002-11 de 5 de enero de 2011, emitida por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá.

Notifíquese,

**NELLY CEDEÑO DE PAREDES**  
**MAGISTRADA**

**LUIS RAMÓN FÁBREGA S.**  
**MAGISTRADO**

**ABEL AUGUSTO ZAMORANO**  
**MAGISTRADO**

**KATIA ROSAS**  
**SECRETARIA**

Sala III de la Corte Suprema de Justicia  
NOTIFÍQUESE POR DUY 9 DE noviembre  
DEL 2015 A LAS 10:13  
DE LA manera A Procurador de la  
Abogado General

- 64 -



**REPÚBLICA DE PANAMÁ  
ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-**

Panamá, veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015).

**VISTOS:**

El Licenciado **GIOVANI A. FLETCHER**, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declaren nulas, por ilegales, algunas frases contenidas en el artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 46 de 23 de junio de 2009, emitido por intermedio del Ministerio de Comercio e Industrias.

**I. ACTO DEMANDADO**

A través del Decreto Ejecutivo No. 46 de 2009, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias reglamentó el Título II de Protección al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento Administrativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.

La demanda de nulidad que nos ocupa, tienen la finalidad de que se declaren nulo por ilegales, las frases del artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de



67

2009, que contienen: “ **el promitente vendedor debe establecer la nueva fecha de entrega e informarlo así al comprador**”. Y, “**En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado..**”

El contenido completo de esa norma es el siguiente:

“Artículo 43. Construcciones nuevas. En los contratos de promesa se compraventa de bienes inmuebles nuevos debe estipularse la fecha cierta o determinable de entrega del mismo.

De darse retrasos en la construcción por causa no imputables al proveedor que impidan hacer la entrega en el plazo estipulado en el Contrato de promesa de Compra Venta, **el promitente vendedor debe establecer la nueva fecha de entrega e informarlo así al promitente comprador.**

**En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado**, por situaciones no imputables al proveedor, el promitente comprador tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización.”

Cabe mencionar, que se incluyó en el libelo de la demanda una solicitud especial, consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las frases acusadas de ilegales del artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 46 de 2009, acusadas de ilegales; sin embargo, la Sala no accedió a esa solicitud, a través de la resolución de 31 de enero de 2011 de la Sala.

## II. DISPOSICIONES LEGALES QUE FIGURA COMO INFRINGIDA

La primera norma que el demandante estima como infringida es el artículo 15 del Código Civil según el cual las órdenes y demás actos ejecutivos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la constitución y a las Leyes. La infracción alegada de esa norma es por violación directa por comisión, explicado en que las frases especificadas previamente en el artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009, violan la letra y espíritu y letra del párrafo tercero del artículo 79 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, por cuanto que esta última ley no permite o facilita la fijación, frente a un previo incumplimiento en la fecha de

60

entrega de un inmueble, dentro de una relación de consumo; sin embargo las frases acusadas de ilegal, deja a voluntad del proveedor que se establezca una nueva fecha de presunta entrega.

Así mismo, que proveer las frases del artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009, la posibilidad de otorgarle a cualquier proveedor en forma unilateral la anotación de una nueva fecha de presunta entrega, frente a un primer incumplimiento en la fecha prometida de entrega contractualmente, establecida originalmente, potencia la violación del espíritu y letra del párrafo tercero del artículo 79 de la Ley 45 de 2007, de protección del consumidor, ya que no consigna en similar vía esa posibilidad.

Agrega, la parte actora que a su juicio es evidente la opción de dar por terminado el contrato de promesa de compra venta frente a un incumplimiento en la entrega del bien inmueble, dispuesto en el referido artículo 79. Y que hay una diferencia textual que se opone al derecho base delimitado en la ley a favor de los consumidores, por medio de la reglamentación estipulada a favor de los consumidores afectados por el incumplimiento en la entrega del bien inmueble en torno al cual contrataron alguna nueva vivienda.

### III. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El funcionario demandado, a través de la nota DM No.254-14 de 27 de febrero de 2014, rindió el informe requerido mediante oficio No.425 de 19 de febrero de 2014, señalando primeramente, que de conformidad con el artículo 184 numeral 14 de la Constitución Política, es atribución del Presidente de la República con la participación del Ministro reglamentar las leyes para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún momento de su espíritu. A ello, agrega que cuando la ley formal no siempre puede agotar en contenido, junto con las complejidades técnicas establecidas al momento de su interpretación y aplicación, se hace necesario atacar las atribuciones de reglamentación del Ejecutivo, a través del Ministro.

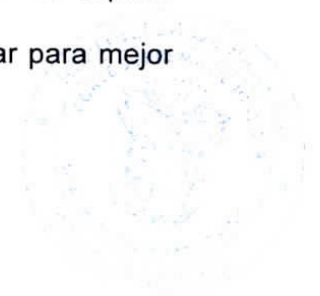


Así, el funcionario en comentario anota, que la ley formal que nos ocupa, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, en su artículo 79 señala ciertas situaciones que animan la necesidad reglamentarse para auxiliar su intención y mejor aplicación de la normativa, razón por la cual se ejercita la atribución de reglamentar, y dicha norma se desarrolla por el artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 46 de 2009, cubriendo la intención y el espíritu por el cual se regulan los contratos de compra venta de las construcciones nueva ordenando las situaciones y especificaciones que cubren , los distintos actores sus derechos y obligaciones.

En ese sentido explica, que de la ley formal se desprende que los proveedores o vendedores de construcciones nuevas tengan la obligación de señalar fecha cierta o determinable para la entrega del bien, lo cual además ha sido expresado en otra normativa como requisito sine qua non para la legitimidad de los contratos de compraventa; y por otro lado, la situación de que puede darse el incumplimiento de fecha de entrega.

Considera, que el incumplimiento de fecha de entrega cierta, que haya sido por causas imputables al proveedor o al comprador, tanto la ley como el reglamento establece que el comprador opte a rescindir el contrato de compra venta sin ningún perjuicio o penalización, y además, que se e devuelvan las sumas abonadas o pagadas; y que así lo dispone el artículo 79 de la ley 45 de 2007; sin embargo, como no establece realidades de las relaciones de los proveedores y consumidores y los hechos subsiguientes al incumplimiento de la entrega sin que medie culpabilidad por parte del proveedor.

Y con relación al artículo 43 del decreto ejecutivo 46 de 2009, se manifiesta que del mismo se desprende que se mantiene la obligación de determinar fecha cierta de entrega, y la potestad del comprador de rescindir el contrato por causas no imputables al proveedor, lo que no se aparta del espíritu ni tenor de la ley formal, sino que por el contrario trata de dilucidar para mejor



70

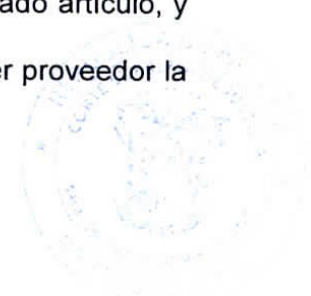
aplicación de la misma, situaciones reales en el quehacer de las construcciones nuevas.

En ese orden, se manifiesta el funcionario que el mencionado artículo viene a establecer las prerrogativas del consumidor por el hecho que el proveedor no cumpla con la fecha determinada de entrega aún cuando fuese por causas no imputables al proveedor.

También, se sostiene en el informe de conducta que es una realidad que antes de la reglamentación de la ley formal, el consumidor o comprador quedaba en indefensión al no pactarse la fecha cierta de entrega en los casos de no imputabilidad del proveedor, y solo se establecían de manera escrita las causas por la cual no era culpable del incumplimiento de la fecha de entrega. Y la reglamentación viene a atender aquellas situaciones en cuanto a la obligatoriedad de señalar fecha cierta o determinable de entrega del bien, y además en caso de que no se cumpla la nueva fecha por causa no imputable al proveedor, la oportunidad al comprador de rescindir sin ningún perjuicio a su contrato, para evitar recurrir a la justicia ordinaria o arbitral, por tanto, la reglamentación plasma el cumplimiento de las finalidades de la ley formal.

#### **IV. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN**

El Procurador de la Administración, mediante la vista 248 de 2 junio de 2014, emitió concepto en el que solicitó a esta Sala que declare que son ilegales las frases "...el promitente vendedor debe establecer una nueva fecha de entrega e informarlo así al promitente comprador." y "En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado.." que forman parte de los párrafos segundo y tercero del artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009, sustentado en que frente a un primer incumplimiento del plazo fijado contractualmente y contrariando lo que se dispone en el mencionado artículo, y la norma reglamentaria cuya nulidad se demanda le da a cualquier proveedor la





71

posibilidad de fijar, de forma unilateral, un nueva fecha para la presunta entrega del bien inmueble objeto de una promesa de compraventa.

Igualmente, en que lo que persigue la potestad reglamentaria tiene que manifestarse con estricto apego a las exigencias de subordinación, desarrollo y complementariedad de la norma legal, es decir, no rebasar el contenido de la ley, lo que no se da en el presente caso, al concederse en la norma legal al consumidor la opción de dar por terminados los contratos de opción de compra venta y de compra venta de construcciones nuevas, en caso de producirse incumplimiento en la fecha de entrega del inmueble, por parte del vendedor, de lo cual se apartan las frases acusadas de ilegales al permitir que el porveedor fije unilateralmente un nuevo plazo de entrega.

### **CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE**

Desarrolladas las etapas procesales de rigor, corresponde a esta Sala entrar a resolver el presente negocio, sobre la base de las consideraciones que siguen:

#### **1. Competencia**

De conformidad con lo establecido en los artículos 206 de la Constitución Política y 97 del Código Judicial, a la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo le están atribuidos los procesos que se originan de actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten o expidan o en que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales o provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

#### **2. Legitimación activa y pasiva**

En el presente caso, actúa como demandante el licenciado Giovani Fletcher, quien comparece como persona natural para impugnar las frases "...el promitente vendedor debe establecer una nueva fecha de entrega e informarlo

72

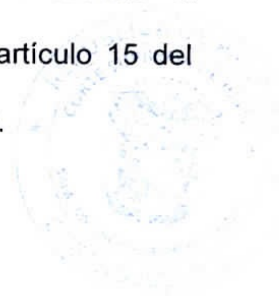
así al promitente comprador.” y “En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado..”, contenidas en el artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 46 de 2009, dictado por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias. En las acciones de nulidad cualquier persona puede recurrir, de conformidad con el artículo 43B de la Ley 135 de 1943, por tanto, el nombrado se encuentra legitimado.

El acto demandado fue dictado por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, organismo estatal que figura entonces, como sujeto pasivo en este proceso.

### 3. Problema Jurídico

Observa este Tribunal que el argumento central del cargo de ilegalidad gira en torno a que en las frases demandadas de ilegales se establece que el promitente vendedor puede establecerla nueva fecha de entrega e informarlo así al promitente comprador; y que en caso de incumplimiento de la nueva fecha, el comprador tienen la opción de dar por terminado el respectivo contrato, un monto máximo y uno específico a pagar, y la ley que regula la materia, la Ley 45 de 2007, específicamente el artículo 79 establece primero, que en los contratos de promesa de compraventa de construcciones nuevas debe constar la fecha cierta o determinable de entrega, y en caso de incumplimiento del plazo de entrega el consumidor tienen la opción de dar por terminado el contrato con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización.

Lo anterior, nos lleva a plantearnos como problema jurídico a resolver en el presente asunto, el siguiente: ¿Si al contemplarse en las frases demandadas de ilegales, contenidas en el artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009, que el promitente vendedor pueda establecer una nueva fecha de entrega en informarlo al promitente comprador; y que cuando este se incumpla es cuando el comprador tiene la opción de rescindir el contrato, se viola el artículo 15 del Código Civil, por ser contrario al artículo 79 de la Ley 45 de 2007?.





73

Observa esta Superioridad que las frases, cuya ilegalidad se solicita, se encuentran establecidas en el artículo 43 del Decreto Ejecutivo 46 de 2009, por el cual se reglamenta el Título II de Protección al Consumidor, y Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento Administrativo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta normas de protección al consumidor y defensa de la competencia. La norma es del contenido siguiente:

“Artículo 43. Construcciones nuevas. En los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles nuevos debe estipularse la fecha cierta o determinable de entrega del mismo.

De darse retrasos en la construcción por causa no imputables al proveedor que impidan hacer la entrega en el plazo estipulado en el Contrato de promesa de Compra Venta, **el promitente vendedor debe establecer la nueva fecha de entrega e informarlo así al promitente comprador.**

**En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado, por situaciones no imputables al proveedor, el promitente comprador tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización.”**

Interpretamos del artículo citado, que con las frases acusadas de ilegales, permite que en caso de no entregarse una construcción nueva, en el plazo estipulado en el contrato de promesa de compraventa originario, el promitente vendedor pueda establecer una nueva fecha de entrega e informarlo al promitente comprador, y cuando se incumpla esa nueva fecha, el promitente comprador tienen la opción de rescindir el respectivo contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización.

Ahora bien, el artículo 79 de la Ley 45 de 2007, que dicta normas de protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición, es del siguiente contenido:

“Artículo 79. construcciones nuevas. El proveedor de construcciones residenciales nuevas deberá establecer, de manera clara y por escrito, los términos y las condiciones de la garantía de la obra.



En caso de que existan diferentes coberturas en la garantía, están deberán estar debidamente detalladas.

La publicidad de las construcciones residenciales nuevas formará parte integral del contrato de compraventa suscrito entre el proveedor y el consumidor. Los anuncios que se publiciten en volantes, panfletos, libros o por cualquier otro medio que el proveedor distribuya son vinculantes para este y exigibles por el consumidor.

En los contratos de promesa de compraventa de construcciones nuevas debe constar la fecha cierta o determinable de entrega. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, el consumidor tendrá la opción de dar por terminado el contrato, con la correspondiente devolución total de las sumas abonadas y sin ningún tipo de penalización".

Precisando sobre el tema sometido a consideración de esta Sala, conceptuamos que el artículo citado, pone de manifiesto que una vez que no se haga entrega de una construcción nueva en la fecha establecida en el contrato de promesa de compraventa, el comprador tiene la opción de rescindir el contrato respectivo, y que se le devuelva el total de la sumas pagadas sin ningún tipo de penalización.

La potestad reglamentaria, manifiesta el Magistrado Víctor L. Benavides Pinilla, en su obra intitulada: "Compendio de Derecho Público Panameño", que la misma obedece a:

"...aquella facultad que tiene el Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter general y obligatorio. Sus expresiones características son los reglamentos (textos orgánicos y de cierta extensión).

También se pueden mencionar los decretos, órdenes, circulares e instrucciones.

La potestad reglamentaria es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, que la tiene por mandato constitucional, es decir, que su ejercicio no emana de la ley ni de una expresa autorización legislativa." (Benavides Pinilla, Víctor L. Compendio de Derecho Público Panameño, Panamá, 2012, pág.871)

Frente a ese escenario, consideramos que las frases acusadas de ilegal del artículo 43 del Decreto Ley No. 45 de 31 de octubre de 20009, infringen una norma de mayor jerarquía, siendo este el artículo 79 de la Ley 45 de 2007, toda



-75-

vez que, este solo permite que el promitente vendedor incumpla con un primer plazo de la fecha de entrega de la construcción establecida en el contrato de promesa de compraventa, para que el promitente comprador tenga la opción de dar por terminado el contrato, sin ningún tipo de penalización, de lo cual no vemos que ello alcance para establecer frente al incumplimiento del plazo inicial fijado, que unilateralmente el promitente vendedor fije otra nueva fecha, y ante el incumplimiento de ésta última, es que surge para el promitente comprador la opción de rescindir el contrato sin penalización alguna.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE SON ILEGALES, las frases "...el promitente vendedor debe establecer la nueva fecha de entrega e informarlo así al comprador". Y, "En caso de incumplimiento del nuevo plazo de entrega fijado..",** contenidas en artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 46 de 23 de junio de 2009, emitido por intermedio del Ministerio de Comercio e Industrias.

**NOTIFÍQUESE,**

  
**ABEL AUGUSTO ZAMORANO**  
MAGISTRADO

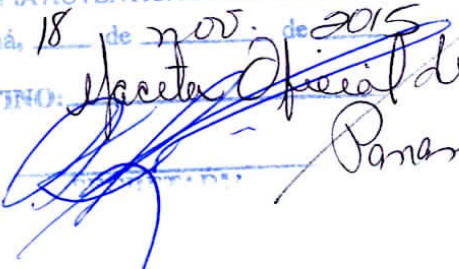
  
**NELLY CEDENO DE PAREDES**  
MAGISTRADA

  
**LUIS RAMON FABREGA S.**  
MAGISTRADO

  
**KATIA ROSAS**  
SECRETARIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA TERCERA  
ES COPIA AUTÉNTICA DE SU ORIGINAL  
Panamá, 18 de nov. de 2015

DESTINO:

  
Gaceta Oficial de  
Panamá

## AVISOS

**PITTA INTERNATIONAL FOUNDATION. (FUNDACIÓN). 2259826-1-52630 D.V. 78.** AVISO DE DISOLUCIÓN. Que dicha fundación ha sido disuelta mediante escritura pública No. 10,902 del 9 de noviembre de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, registrada el 10 de diciembre de 2015, al Folio No. 52630, Asiento No. 2, Disolución de la Sección de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá. L. 201-435920. Única publicación.

**NANOUCHKA DEVELOPMENT CORP. (Sociedad Anónima). 715561-1-471804 D.V. 23.** AVISO DE DISOLUCIÓN. Que dicha sociedad ha sido disuelta mediante escritura pública No. 11,201 del 17 de noviembre de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, registrada el 7 de diciembre de 2015, al Folio No. 471804, Asiento No. 2, Disolución de la Sección de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá. L. 201-435922. Única publicación.

**EMPASE-PANAMA CORP. (SOCIEDAD ANÓNIMA). 439-692-10823 D.V. 26.** AVISO DE DISOLUCIÓN. Que dicha sociedad ha sido disuelta mediante escritura pública No. 11,693 del 30 de noviembre de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, registrada el 28 de diciembre de 2015, al Folio No. 10823, Asiento 2, Disolución de la Sección de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá. L. 201-435923. Única publicación.

**PELICULAS EXTRUDIAS PELEX S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA). 155613232-2-2015 D.V. 89.** AVISO DE DISOLUCIÓN. Que dicha sociedad ha sido disuelta mediante escritura pública No. 10,707 del 28 de octubre de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, registrada el 18 de noviembre de 2015, al Folio No. 155613232, Asiento 4, Disolución de la Sección de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá. L. 201-435921. Única publicación.

**DERMOTT OVERSEAS CORP. (SOCIEDAD ANÓNIMA). R.U.C. 970-82-20420 D.V. 73.** AVISO DE DISOLUCIÓN. Que dicha sociedad ha sido disuelta mediante escritura pública No. 12,516 del 18 de diciembre de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, registrada el 6 de enero de 2016, al Folio No. 20420 (S), Disolución de la Sección de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá. L. 201-435914. Única publicación.

**AVISO DE DISOLUCIÓN.** De conformidad con la ley, se avisa al público que mediante Escritura Pública No. 21,136 de 22 de diciembre de 2015, de la Notaría Primera del Circuito e inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, al Folio 776741 (S), el 7 de enero de 2016, ha sido disuelta la sociedad

**LACAPA INTERNATIONAL INC.** Panamá, 12 de enero de 2016. L. 201-435907. Única publicación.

---

**AVISO DE DISOLUCIÓN.** De conformidad con la ley, se avisa al público que mediante Escritura Pública No. 6812 de 6 de octubre de 2014, de la Notaría Primera del Circuito e inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, al Folio 460312 (S), el 6 de enero de 2016, ha sido disuelta la sociedad **UNITRA HOLDING CORP.** Panamá, 13 de enero de 2016. L. 201-435910. Única publicación.

---

**AVISO.** De conformidad con la ley, se avisa al público que mediante Escritura Pública No. 20,478 de 15 de diciembre de 2015, de la Notaría Primera del Circuito e inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, al Folio número 449116, ha sido disuelta la sociedad **NEWLY OVERSEAS INC.** Panamá, 12 de enero de 2016. L. 201-435908. Única publicación.

---

**AVISO AL PÚBLICO.** Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 777 del Código de Comercio, hago del conocimiento público que he traspasado a **RICAUTER CASTILLO CASTILLO**, varón, mayor de edad, portador de la cédula No. 4-700-200, establecimiento comercial denominado **MINI SÚPER DOÑA NORA**, ubicado en la provincia de Chiriquí, distrito de Boquerón, corregimiento de Bagalá, comunidad de Ojo de Agua, calle principal frente a los talleres de Los Delfines. Dado en la ciudad de David, a los doce (12) días del mes de enero de 2016. Atentamente, **NORA CASTILLO BARRÍA**, cédula No. 4-121-1215 – 2010-208731. L. 201-434895. Primera publicación.

## EDICTOS



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGIÓN 4 – COCLÉ

EDICTO No 410-09

EL SUSCRITO FUNCIONARIO SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ

**HACE SABER QUE:**


Que **REYNALDO RODRIGUEZ PINZON Y OTRA**, vecino (a) de **EL CRISTO**, Corregimiento de **EL CRISTO**, Distrito de **AGUADULCE**, portador (a) de la cedula N° **2-132-634**, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No. **2-1128-07**, según plano aprobado N° **201-02-11014**, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable con una superficie total de **7 Has. + 2018.94 m<sup>2</sup>**, ubicada en la localidad de **LA TOYOSA**, Corregimiento de **EL CRISTO**, Distrito de **AGUADULCE**, Provincia de **COCLÉ**, comprendidos dentro de los siguientes linderos:

NORTE : **CAMINO REAL 10.00 MTS AL PINZON – RIO COCOBO - LUCIANO VARELA**  
SUR : **MELVIN LOPEZ**  
ESTE : **LUCIANO VARELA**  
OESTE : **CAMINO REAL 10.00 MTS AL PINZON - RIO COCOBO**

Para los efectos legales, se fija el presente edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la Provincia de Coclé y en la Corregiduría de **EL CRISTO**. Copia del mismo se hará publicar en el órgano de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

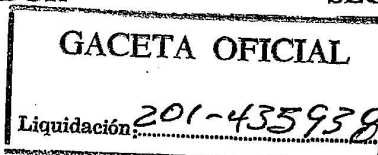
Este edicto tendrá una vigencia de 15 días a partir de su última publicación.

**DADO EN LA CIUDAD DE PENONOME, HOY 25 DE NOVIEMBRE DE 2009.**

  
**SR. ERNESTO GUARDIA**  
FUNCIONARIO SUSTANCIADOR



  
**ANGELICA DEL C. NUÑEZ N.**  
SECRETARIA AD-HOC







REPUBLICA DE PANAMA  
AUTORIDAD NACIONAL DE  
ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
PROVINCIA DE COCLE

EDICTO No. 223-15

EL SUSCRITO FUNCIONARIO SUSTANCIADOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE  
TITULACION Y REGULARIZACION DE TIERRA PROVINCIA DE COCLÉ,

HACE SABER QUE:

Que JUANITA DE LA CRUZ ARIAS Y OTROS vecino (a) de PAJONAL ARRIBA Corregimiento PAJONAL del Distrito de PENONOME portador (a) de la cedula N°. 2-50-142, ha solicitado a la Dirección Nacional de Titulación y Regularización mediante solicitud No. 2-991-07 según plano aprobado N°. 206-06-13270, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía Con una superficie total de 4 HAS + 6026.63 M2 Ubicada en la localidad de PAJONAL ARRIBA, Corregimiento de PAJONAL, Distrito de PENONOME, Provincia de COCLE, comprendidos dentro de los siguientes linderos:

LINDEROS DE GLOBO A 1 HAS + 0332.79 M2

NORTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: JUAN ALBERTO MORAN SOTO –  
SERVIDUMBRE A CAMINO PRINCIPAL DE 5.0 M

SUR: SERVIDUMBRE DE 5.0 M A OTROS PREDIOS A PAJONAL ARRIBA

ESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: JOSE ILARIO ARIAS

OESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: JUAN ALBERTO MORAN SOTO –  
TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: BERNABE ALVEO

LINDEROS DE GLOBO B 3 HAS + 5693.84 M2

NORTE: SERVIDUMBRE DE 5.0 M A OTROS PREDIOS A PAJONAL ARRIBA

SUR: RIO SALADO

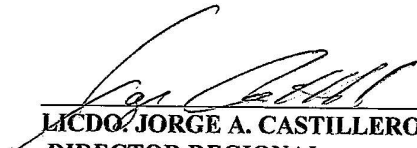
ESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: JOSE ILARIO ARIAS – TERRENO  
NACIONAL OCUPADO POR: SAMUEL MARTINEZ

OESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR: BERNABE ALVEO – TERRENO NACIONAL  
OCUPADO POR: BASILIA ALVEO APOLAYO

Para los efectos legales, se fija el presente edicto en lugar visible de la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de Tierra en la Provincia de Coclé y en la Corregiduría de PAJONAL Copia del mismo se hará publicar en el órgano de publicidad correspondiente tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario.

Este edicto tendrá una vigencia de 15 días a partir de su última publicación.

DADO EN LA CIUDAD DE PENONOME, HOY 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

  
LICDO. JORGE A. CASTILLERO P.  
DIRECTOR REGIONAL  
ANATI – COCLE



  
LICDA. YASELIZ CORREA  
SECRETARIA AD-HOC

GACETA OFICIAL

Liquidación 201-435238



REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 247-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Chiriquí al público.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) Señor (a) **MARIA JUDITH NUÑEZ MENDEZ** Vecino (a) de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** del Distrito de **GUALACA** provincia de **CHIRIQUI** Portador de la cédula de identidad personal No. **4-205-187** ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud No. **4-0005** según plano aprobado No. **408-03-24588**, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de **01 HÁS. + 8870.92 m2**

El terreno esta ubicado en la localidad de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** Distrito de **GUALACA** Provincia de **CHIRIQUI** comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: CAMINO A OTROS LOTES A LOS ANGELES (15M)

SUR: FINCA 359475 DOCUMENTO 2048293, ASIENTO 1 PROPIEDAD DE MARIA JUDITH NUÑEZ MENDEZ

ESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ

OESTE: CAMINO A OTROS LOTES A LOS ANGELES (15M)

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de **GUALACA** o en la Corregiduría de **LOS ANGELES** copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

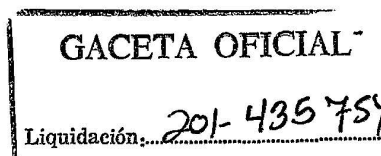
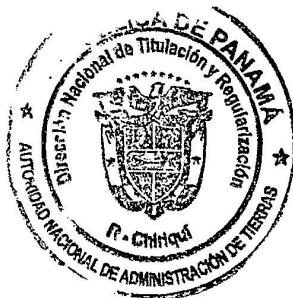
Dado en DAVID a los 24 días del mes de **DICIEMBRE** de 2015

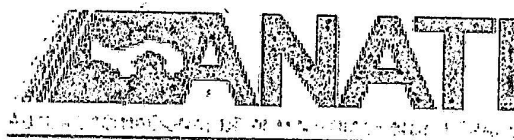
Firma:

Nombre: **ELVIA ELIZONDO**  
Secretaria Ad Hoc.

Firma:

Nombre: **LICDA. INDIRA HERRERA DE GUERRA**  
Funcionario Sustanciador





**Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración  
Tierras**

**EDICTO N° 8-7-85-14**

**HACE CONSTAR:**

Que EL Señor (a). **HILADURA GAMBOA DE SANTANA**  
Vecino (a) de **TIERRA PROMETIDA** Corregimiento de **CHEPO** del Distrito  
de **CHEPO**, Provincia de **PANAMÁ**, Portador de la cédula de identidad personal  
**N° 8-205-1683**, han solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierra  
mediante solicitud **N° 8-7-668-07**, según plano aprobado **N° 805-01-20477** la  
adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra Patrimonial adjudicables  
que será segregada de la **FINCA 160102, TOMO 22633, FOLIO 8**, con una  
superficie total de, **2HAS + 5393.09M2**,  
Propiedad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

Terreno ubicado en **TIERRA PROMETIDA** Corregimiento de, **CHEPO**  
Distrito de **CHEPO** Provincia de **PANAMÁ**.  
Comprendida con los siguiente Linderos:

**NORTE:** CALLE OTRAS FINCAS DE 15.00 MTS.

**SUR:** SERVIDUMBRE DE 15.00 MTS., ROLANDO ATHANASIDIS.

**ESTE:** RINA ISABEL AYALA, DEMETRIO IVAN ORTIZ.

**OESTE:** BENEDICTA SANDOVAL VILLARRETA

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la  
Alcaldía del Distrito de **CHEPO** o en la corregiduría de **CHEPO** copia del mismo se le  
entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad  
correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario.  
Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en **CHEPO**, a los 2 días del mes de **ABRIL** de **2014**.

Firma: Migdalís Montenegro

Nombre: **MIGDALIS MONTENEGRO**  
Secretaría Ad - Hoc.

Firma: Nelson Gratacos

Nombre: **LIC. NELSON GRATACOS**  
Funcionario Sutanciador

**GACETA OFICIAL**

Liquidación: 201- 435 942





REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 248-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de **Chiriquí** al público.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) Señor (a) **VICTOR FLORENCIO NUÑEZ MENDEZ** Vecino (a) de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** del Distrito de **GUALACA** provincia de **CHIRIQUI** Portador de la cédula de identidad personal No. **4-164-165** ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud No. **4-0342** según plano aprobado No. **408-03-24560**, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de **03 HÁS. + 4406.25 m2**

El terreno esta ubicado en la localidad de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** Distrito de **GUALACA** Provincia de **CHIRIQUI** comprendida dentro de los siguientes linderos:

**NORTE:** TERRENO NACIONAL OCUPADO POR MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ, CAMINO A OTROS LOTES A LOS ANGELES (15M), TERRENO NACIONAL OCUPADO POR MIRIAM JANETH NUÑEZ MENDEZ

**SUR:** TERRENO NACIONAL OCUPADO POR LORENZO PATIÑO GONZALEZ, FINCA 190, TOMO 10, FOLIO 128 PROPIEDAD DE ITZA ISABEL DEL CID DE MONTERO

**ESTE:** TERRENO NACIONAL OCUPADO POR MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ, FINCA 190, TOMO 10, FOLIO 128 PROPIEDAD DE ITZA ISABEL DEL CID DE MONTERO

**OESTE:** TERRENO NACIONAL OCUPADO POR MIGUEL ANGEL NUÑEZ MENDEZ, CAMINO A OTROS LOTES A LOS ANGELES (15M), TERRENO NACIONAL OCUPADO POR LORENZO PATIÑO GONZALEZ

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de **GUALACA** o en la Corregiduría de **LOS ANGELES** copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en **DAVID** a los **24** días del mes de **DICIEMBRE** de **2015**

Firma:

Nombre: **ELVIA ELIZONDO**

Secretaria Ad - Hoc.

Firma:

Nombre: **LICDA. INDIRA HERRERRA DE GUERRA**

Funcionario Sustanciador



GACETA OFICIAL

Liquidación: **201-435785**



REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 249-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Chiriquí al público.

**HACE CONSTAR:**

**Que el (los) Señor (a) MIRIAM JANETH NUÑEZ MENDEZ Vecino (a) de LOS ANGELES Corregimiento de LOS ANGELES del Distrito de GUALACA provincia de CHIRIQUI Portador de la cédula de identidad personal No. 4-778-1546 ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud No. 4-0169 según plano aprobado No. 408-03-24137, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de 03 HÁS. + 4081.33 m2**

El terreno esta ubicado en la localidad de LOS ANGELES Corregimiento de LOS ANGELES Distrito de GUALACA Provincia de CHIRIQUI comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: CAMINO A LOS ANGELES A OTROS LOTES (15M), TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE MATEO NUÑEZ MENDEZ

SUR: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR VICTOR FLORENCIO NUÑEZ MENDEZ, FINCA 190, TOMO 10, FOLIO 128 PROPIEDAD DE ITZA ISABEL DEL CID DE MONTERO

ESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE MATEO NUÑEZ MENDEZ, FINCA 190, TOMO 10, FOLIO 128 PROPIEDAD DE ITZA ISABEL DEL CID DE MONTERO

OESTE: CAMINO A LOS ANGELES A OTROS LOTES (15M), TERRENO NACIONAL OCUPADO POR VICTOR FLORENCIO NUÑEZ MENDEZ,

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de GUALACA o en la Corregiduría de LOS ANGELES copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en DAVID a los 24 días del mes de DICIEMBRE de 2015

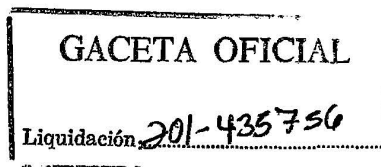
Firma:

Nombre: ELVIA ELIZONDO

Secretaria Ad - Hoc.

Firma:

Nombre: LICDA. INDIRA HERRERRA DE GUERRA  
Funcionario Sustanciador





REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 250-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Chiriquí al público.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) Señor (a) **ALCIBIADES NUÑEZ MENDEZ** Vecino (a) de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** del Distrito de **GUALACA** provincia de **CHIRIQUI** Portador de la cédula de identidad personal No. **4-120-2008** ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud No. **4-0341** según plano aprobado No. **408-03-23933**, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de **03 HÁS. + 3391.07 m2**

El terreno esta ubicado en la localidad de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** Distrito de **GUALACA** Provincia de **CHIRIQUI** comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR ELSA MARIA NUÑEZ MENDEZ, CAMINO A OTROS LOTES (15M)

SUR: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR AIDEE LUCITA NUÑEZ MENDEZ

ESTE: CAMINO A LOS ANGELES A OTROS LOTES (15M)

OESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR DANIEL ENRIQUE NUÑEZ MENDEZ, TERRENO NACIONAL OCUPADO POR AIDEE LUCITA NUÑEZ MENDEZ

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de **GUALACA** o en la Corregiduría de **LOS ANGELES** copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

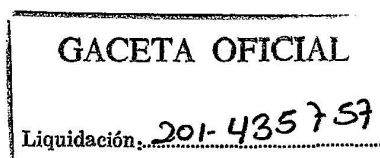
Dado en DAVID a los 24 días del mes de **DICIEMBRE** de 2015

Firma:

Nombre: **ELVIA ELIZONDO**  
Secretaria Ad - Hoc.

Firma:

Nombre: **LICDA. INDIRA HERRERRA DE GUERRA**  
Funcionario Sustanciador







REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 251-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Chiriquí al público.

**HACE CONSTAR:**

**Que el (los) Señor (a) VILMA ITZEL NUÑEZ MENDEZ Vecino (a) de LOS ANGELES Corregimiento de LOS ANGELES del Distrito de GUALACA provincia de CHIRIQUI Portador de la cédula de identidad personal No. 4-116-2774 ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud N°. 4-0340 según plano aprobado N° 408-03-24587, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de 03 HÁS. + 3674.34 m2**

**El terreno esta ubicado en la localidad de LOS ANGELES Corregimiento de LOS ANGELES Distrito de GUALACA Provincia de CHIRIQUI comprendida dentro de los siguientes linderos:**

**NORTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE ABEL MONTERO GONZALEZ**

**SUR: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE MATEO NUÑEZ MENDEZ**

**ESTE: FINCA 190, TOMO 10, FOLIO 128 PROPIEDAD DE ITZA ISABEL DEL CID DE MONTERO**

**OESTE: CAMINO A LOS ANGELES A OTROS LOTES (15M)**

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de GUALACA o en la Corregiduría de LOS ANGELES copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

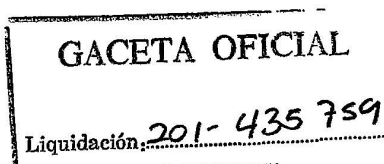
Dado en DAVID a los 24 días del mes de DICIEMBRE de 2015

Firma:

Nombre: **ELVIA ELIZONDO**  
Secretaria Ad - Hoc.

Firma:

Nombre: **LICDA. INDIRA HERRERRA DE GUERRA**  
Funcionario Sustanciador





REPUBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
ANATI, CHIRIQUI

**EDICTO NO. 252-2015**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Chiriquí al público.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) Señor (a) **EDUVIGES NUÑEZ MENDEZ** Vecino (a) de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** del Distrito de **GUALACA** provincia de **CHIRIQUI** Portador de la cédula de identidad personal No. **4-164-199** ha solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mediante solicitud N°. **4-0345** según plano aprobado N° **408-03-23947**, la adjudicación a título oneroso de una parcela de Tierra Baldía Nacional Adjudicable con una superficie total de **03 HÁS. + 3508.24 m2**

El terreno esta ubicado en la localidad de **LOS ANGELES** Corregimiento de **LOS ANGELES** Distrito de **GUALACA** Provincia de **CHIRIQUI** comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR ELSA MARIA NUÑEZ MENDEZ, TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE ABEL MONTERO GONZALEZ

SUR: CAMINO A OTROS LOTES (15.00)

ESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR JOSE ABEL MONTERO GONZALEZ, CAMINO A LOS ANGELES A OTROS LOTES (15.00)

OESTE: TERRENO NACIONAL OCUPADO POR ELSA MARIA NUÑEZ MENDEZ, CAMINO A OTROS LOTES (15.00)

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de **GUALACA** o en la Corregiduría de **LOS ANGELES** copias del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena la Ley 37 de 1962. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

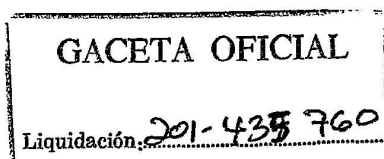
Dado en DAVID a los 24 días del mes de **DICIEMBRE** de 2015

Firma:

Nombre: **ELVIA ELIZONDO**  
Secretaria Ad - Hoc.

Firma:

Nombre: **LICDA. INDIRA HERRERA DE GUERRA**  
Funcionario Sustanciador



**AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS  
DIRECCION NACIONAL DE TITULACION Y REGULARIZACION  
PROVINCIA DE DARIEN  
EDICTO N° 94-15**

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección de Titulación y Regularización en la provincia de **DARIÉN** al público:

**HACE SABER**

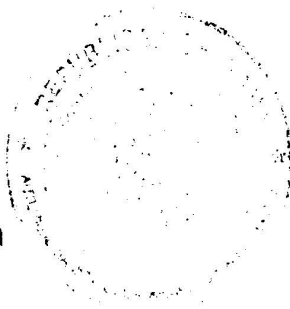
Que el señor (a), **CANOPY CAMP DARIÉN S.A., FICHA 1994724, DOCUMENTO. 739220** "Representante Legal" **RAUL ALBERTO ARIAS DE PARA** con cédula de identidad personal N° **8-144-980**, vecino (a) de **PANAMA**, Corregimiento de **PANAMA**, Distrito de **PANAMA**, *Provincia de PANAMA* ha solicitado a la Dirección Nacional de Titulación y Regularización, mediante solicitud N° **5-956-11**, según plano aprobado N° **505-08-2479**, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie de **25HAS.+4325.74mc**, ubicada en la localidad de **QUEBRADA GRANDE**, Corregimiento de **METETI**, Distrito de **PINOGENA**, Provincia de **DARIÉN**, comprendido dentro de los siguientes linderos:


- Norte:** PROPIEDAD DE ZOBEIDA LIBRADA HERRERA. FINCA 5767 PROPIEDAD DE CANOPY CAMP DARIÉN S.A. Y TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: ZOBEIDA LIBRADA HERRERA.
- Sur:** TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: PEDRO VARGAS JIMENEZ Y TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: FELICIANO MARIN.
- Este:** TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: DANIEL ALBERTO ARIAS BARAKAT, TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: PEDRO VARGAS JIMENEZ, PROPIEDAD DE CANOPY CAMP DARIÉN S.A. Y CAMINO DE SERVIDUMBRE DE 6.00 METROS DE ANCHO A CAMINO PRINCIPAL.
- Oeste:** TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: ZOBEIDA LIBRADA HERRERA Y TERRENOS NACIONALES OCUPADO POR: ISIDRO SAEZ DÍAZ.

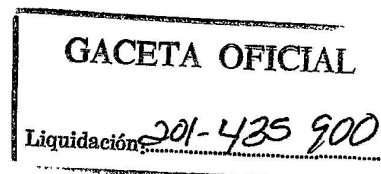
Para los efectos legales, se fija el presente **EDICTO** en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía Municipal del Distrito de **PINOGENA**, (o) la Corregiduría de **METETI** y copias del mismo se entregan al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario.

Este edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación, Dado en Santa Fe a los **30** días del mes de **DICIEMBRE** del **2015**.

  
**MARGARITA VILLEGAS**  
Directora Regional de la  
Dirección de Titulación  
Y Regularización / Darién



  
**LELIA LORE**  
Secretaria Ad - Hoc







## REPÚBLICA DE PANAMÁ

## REGIONAL ÁREA METROPOLITANA

## EDICTO N° AM-060-2015

El suscrito Funcionario Sustanciador a.i. de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en la provincia de Panamá al público.

## HACE CONSTAR:

Que las señoras, JASMINA ELENA ABREGO DE ABREGO, con cédula de identidad personal N° 8-309-911, con domicilio en BDA. SUNTRACS, CASA N° 42, calle principal, corregimiento de ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS, distrito de PANAMÁ, provincia de PANAMÁ; JENIFFER LIZETH ABREGO ABREGO con cédula de identidad personal N° 8-816-1580, con domicilio en BDA. SUNTRACS, CASA N° 42, corregimiento de ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS, distrito de PANAMÁ, provincia de PANAMÁ; han solicitado a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Regional Área Metropolitana, mediante solicitud N° AM-011-2012 de 03 de FEBRERO de 2012, según plano aprobado N° 808-15-24016 de 05 de JULIO de 2013, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie total de 0 Has. + 1448.42 M2 que forma parte de la Finca N° 1935, actualizada al Tomo 33, Folio 232, propiedad de ANATI.

El terreno está ubicado en la localidad de CALZADA LARGA, corregimiento de CHILIBRE, distrito de PANAMÁ, provincia de PANAMÁ comprendida dentro de los siguientes linderos:

- Norte:** RESTO DE LA FINCA 1935 TOMO 33 FOLIO 232 PROPIEDAD DE LA ANATI OCUPADO POR ISABEL CRISTINA MIRANDA ABREGO Y GISELA ELENA MIRANDA DE ERASMO.
- Sur:** SERVIDUMBRE DE 4.00 METROS DE ANCHO Y RESTO DE LA FINCA 1935 TOMO 33 FOLIO 232 PROPIEDAD DE LA ANATI OCUPADO POR MARIA VICTORIA MIRANDA DE VERGARA Y CEFERINO VERGARA RUDAS.
- Este:** SERVIDUMBRE DE TIERRA DE 6.00 METROS DE ANCHO HACIA CALLE PRINCIPAL DE CALZADA LARGA Y HACIA OTROS LOTES.
- Oeste:** RESTO DE LA FINCA 1935 TOMO 33 FOLIO 232 PROPIEDAD DE LA ANATI OCUPADO POR PEDRO JULIO MIRANDA VASQUEZ, FERNADO ALEXANDER, RESTO DE LA FINCA 1935 TOMO 33 FOLIO 232 PROPIEDAD DE LA ANATI OCUPADO POR MIRANDA VASQUEZ, MARÍA MIRANDA DE VERGARA Y CEFERINO VERGARA RUDAS.

Para los efectos legales se fija el presente edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Panamá o en la corregiduría donde se encuentra la parcela de terreno solicitada, copias del mismo se le entregarán a la parte solicitante para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en PANAMÁ, a los 13 días del mes de MAYO de 2015.

Firma: J. Valencia  
Nombre: JUDITH VALENCIA F.  
Secretaria Ad – Hoc.  
AM

Firma: J. Ramos  
Nombre: JORGE RAMOS  
Jefe Sustanciador a.i.



GACETA OFICIAL

Liquidación: 201-433378